

**CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE 2 TÉCNICOS DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL EN LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PALENCIA**

CUESTIONARIO DEL PRIMER EXAMEN.

Solo es válida una respuesta para cada una de las preguntas.

Palencia, 21 de mayo de 2021

1. De acuerdo con la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, la transferencia y delegación de competencias en favor de las Diputaciones Provinciales:

- a) Deberán realizarse, en caso de transferencia a favor de todas ellas, y en caso de delegación, únicamente a favor de la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas.
- b) Deberán realizarse conjuntamente a todas ellas, y cuando la naturaleza o características del servicio lo exijan, la transferencia o delegación se limitará a la Diputación Provincial afectada.
- c) Deberán realizarse, en cualquier caso, a favor de la Diputación Provincial interesada, cuando la naturaleza o características del servicio lo exijan.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Según el art.73.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, los grupos políticos:

- a) Únicamente tendrán derecho a una dotación económica con cargo a los Presupuestos de la Corporación, que contendrá un componente fijo y otro variable, previo acuerdo de la Junta de Gobierno de la Corporación.
- b) Podrán tener derecho a una asignación económica anual, con cargo a los Presupuestos de la Corporación, que contendrá un componente fijo y otro variable, siempre que lo acuerde el Pleno, a propuesta de la Junta de Gobierno.
- c) Podrán contar con una asignación económica, con cargo a los Presupuestos anuales de la Corporación, siempre que lo acuerde el Pleno de la misma.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3. La efectiva ejecución de las actividades o servicios esenciales, en régimen de monopolio, requiere, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen local:

- a) Aprobación de la Junta de Gobierno de la Corporación Local.
- b) Aprobación del Pleno de la Corporación Local, previa autorización de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, en función del tipo de actividad o servicio de que se trate.
- c) Aprobación del Pleno de la Corporación Local y del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- d) Aprobación del Pleno de la Corporación Local, y de la Administración que ejerza la tutela financiera según el caso.

4. De conformidad con el art 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el recurso especial de contratación podrá interponerse:

- a) Contra la formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no cumplen los requisitos legales y contra los acuerdos de rescate de concesiones.
- b) Contra los anuncios de licitación e invitaciones a los licitadores, en función del procedimiento de adjudicación y en los términos previstos legalmente.
- c) Contra todos los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, con independencia de dicho procedimiento y del tipo de tramitación del expediente
- d) Contra todas las actuaciones contractuales, con independencia del procedimiento de adjudicación y del tipo de tramitación del expediente.

5. El procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades, conforme dispone la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas:

- a) Que se elaboren por los concejales de todos los municipios promotores de la mancomunidad, constituidos en asamblea, y se aprueben por los Plenos de todos los Ayuntamientos, previo informe, sobre el proyecto de estatutos, de la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas.
- b) Que se elaboren a instancia de los concejales de los municipios promotores de la mancomunidad, para su aprobación por el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos y ulterior remisión a la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas, para su publicación en el BOP.
- c) Que se elaboren por los concejales de los municipios que promueven la iniciativa de mancomunarse, para su aprobación por el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos y ulterior remisión a la Diputación o Diputaciones Provinciales interesadas, para su publicación en el BOP.
- d) Que se elaboren por los portavoces de los de los municipios que promueven la iniciativa de mancomunarse, para su aprobación por el Pleno de cada uno de los Ayuntamientos y ulterior ratificación por la Comunidad Autónoma.

6. En el art.26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se establece que en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la Diputación Provincial coordinará la prestación de los servicios relativos a:

- a) Gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa.
- b) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
- c) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.
- d) Pavimentación de vías urbanas.

7. De acuerdo con el art 51 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, los acuerdos de las entidades locales son nulos:

- a) Cuando se adopten en las sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, siempre que no se ratifiquen de forma expresa en la sesión ordinaria siguiente por mayoría absoluta del número legal de miembros.
- b) Cuando se adopten en sesiones ordinarias sobre materias no incluidas en el orden del día, salvo especial y previa declaración de urgencia hecha por el órgano correspondiente, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
- c) Cuando se adopten en sesiones extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en su convocatoria, siempre que no se ratifiquen de forma expresa en la sesión ordinaria siguiente por mayoría absoluta del número legal de miembros
- d) Cuando se adopten en sesiones ordinarias o extraordinarias sobre asuntos no comprendidos en el orden del día o en su convocatoria, sin cumplir el requisito de la mayoría exigible ni se someta a ratificación ulterior.

8. En la organización municipal, de acuerdo con el art. 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, no es correcto:

- a) El Alcalde, los tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
- b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios.
- c) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno.
- d) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.

9. De conformidad con las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el Presidente de la Diputación Provincial no es el órgano de contratación para la celebración de:

- a) Contratos de obras, de suministros, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros.
- b) Para la celebración de contratos privados, así como la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto, ni el importe de tres millones de euros.
- c) Para la enajenación de los bienes declarados de valor histórico o artístico cualquiera que sea su valor.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

10. La actividad de intervención de las Entidades Locales, según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, se ajustará, en todo caso a los siguientes principios:

- a) Principio de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
- b) Principio de legalidad, equidad, transparencia y proporcionalidad.
- c) Principios de buena administración.
- d) Principios de intervención mínima y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

11. Las contribuciones especiales se devengan desde el momento en que las obras:

- a) Se han contratado.
- b) Se han ejecutado.
- c) Se han iniciado.
- d) Se han proyectado.

12. La base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de:

- a) 15 años.
- b) 20 años.
- c) 25 años.
- d) 30 años.

13. Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León, las infracciones urbanísticas graves se sancionarán:

- a) Con multa de diez mil uno a trescientos mil euros.
- b) Con multa de diez mil uno a doscientos mil euros.
- c) Con multa de mil uno a cien mil euros.
- d) Con multa de cien mil a trescientos mil euros.

14. Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la primera ocupación de construcciones está sometida a:

- a) Licencia urbanística.
- b) Declaración responsable.
- c) Comunicación previa.
- d) Autorización ambiental.

15. Según la Ley 5/1999, de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León, la declaración de ruina:

- a) Solo podrá ser parcial porque prima el deber de conservación.
- b) Incluirá los plazos de demolición en los inmuebles declarados como Monumento.
- c) Detallará las medidas necesarias para asegurar la integridad física de los ocupantes y de terceras personas.
- d) En caso de incumplimiento de los plazos señalados en la declaración de ruina, el Ayuntamiento solo podrá resolver la sujeción del inmueble a los regímenes de venta forzosa.

16. Según el art. 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad vial, no son competencias municipales:

- a) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.
- b) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías.
- c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.
- d) El cierre de vías interurbanas y travesías, cuando sea necesario.

17. Según el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la comunicación ambiental, señale la incorrecta:

- a) Deberá incluir una descripción de las instalaciones en la que se indique la incidencia ambiental de las mismas.
- b) Deberá incluir la información que determine las emisiones, catalogaciones ambientales de la instalación de manera justificada, medidas correctoras, controles efectuados para confirmar la idoneidad de las medidas correctoras y medidas de control previstas.
- c) La presentación de la comunicación ambiental exime de la obtención de otras autorizaciones o licencias.
- d) La comunicación ambiental se presentará una vez que hayan finalizado las obras.

18. Las Diputaciones Provinciales tendrán entre sus competencias propias:

- a) Asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
- b) Asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
- c) Asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 5.000 habitantes, cuando éstos lo deleguen.
- d) Asumir la prestación de los servicios de prevención y extinción de incendios en los municipios de menos de 20.000 habitantes, en todo caso.

19. Según el art. 48 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León, son competencias municipales:

- a) La planificación de los servicios sociales, en el marco, desarrollo y ejecución de la planificación autonómica, así como la colaboración y cooperación con la consejería competente en materia de servicios sociales, bien directamente o bien a través de los organismos a ella adscritos.
- b) La aprobación de los catálogos de servicios sociales provinciales.
- c) La autorización para la elaboración del catálogo de servicios sociales de Castilla y León y del mapa de servicios sociales de Castilla y León.
- d) La aprobación de la determinación de las zonas y áreas de acción social, así como las estructuras de tercer nivel que pudieran corresponderles al amparo de esta ley, respetando, en todo caso, las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, previstas en la normativa de ordenación del territorio.

20. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, son impuestos obligatorios:

- a) Únicamente el Impuesto de Bienes Inmuebles.
- b) Únicamente el Impuesto de Bienes Inmuebles, el de plusvalía y el de Vehículos de tracción mecánica.
- c) Todos los impuestos son potestativos en función de la potestad de autorganización de las haciendas locales.
- d) El Impuesto de Bienes Inmuebles, el de Actividades Económicas y el de Vehículos de tracción mecánica.

21. En relación con la concertación de operaciones de crédito, es necesario:

- a) Obtener el previo informe de la Intervención.
- b) Disponer de ahorro neto negativo.
- c) Tener el presupuesto en estado de prórroga en todo caso.
- d) Obtener en todo caso la autorización del Ministerio de Hacienda.

22. Al presupuesto general de la Diputación Provincial irán como anexos, según el art. 166 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido la Ley de Haciendas Locales:

- a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de un año, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito inframunicipal
- b) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
- c) El plan de inversiones que podrá coordinarse, en su caso, con el programa de actuación y planes de etapas de planeamiento urbanístico.
- d) Los programas cuatrienales de actuación, inversiones y financiación únicamente de las sociedades mercantiles cuyo capital social sea titular único la entidad local.

23. La Cuenta General de la Diputación Provincial será expuesta al público:

- a) por plazo de 15 días durante los cuales, y ocho más, los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
- b) por plazo de 15 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
- c) por plazo de 20 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.
- d) por plazo de 10 días durante los cuales los interesados podrán examinarla y presentar reclamaciones, reparos u observaciones.

24. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales son funciones encomendadas a la tesorería de las entidades locales, señale la incorrecta:

- a) Recaudar únicamente los derechos.
- b) Servir al principio de unidad de caja, mediante la centralización de todos los fondos y valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.
- c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.
- d) Responder de los avales contraídos.

25. Están sometidos a la fiscalización del Consejo de Cuentas de Castilla y León:

- a) Las entidades locales territoriales de la Comunidad Autónoma únicamente.
- b) Las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, así como las entidades del sector público que lo integran.
- c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital la participación conjunta de las entidades sujetas a fiscalización sea superior al 25 por ciento.
- d) Las entidades locales territoriales y las mancomunidades de la Comunidad Autónoma únicamente.

26. De acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
- b) Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos favorables para los interesados, previa comunicación expresa al administrado, sin necesidad de impugnarlos ante el orden jurisdiccional.
- c) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.
- d) La declaración de lesividad podrá adoptarse cualquiera que sea el plazo que haya transcurrido desde que se dictó el acto administrativo.

27. En los litigios entre Administraciones Públicas:

- a) Es requisito preceptivo la previa interposición de recurso en vía administrativa.
- b) En ningún caso podrá acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
- c) No cabrá interponer recurso en vía administrativa.
- d) Todos los actos o acuerdos de las Entidades Locales podrán ser suspendidos preventivamente por el Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al Presidente de la Corporación.

28. En los procedimientos administrativos iniciados a solicitud del interesado:

- a) La desestimación por silencio administrativo exime a la Administración Pública de su obligación de dictar resolución expresa.
- b) En todos los casos, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo.
- c) La estimación por silencio administrativo no tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
- d) La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente.

29. En relación con la actividad administrativa impugnada ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, señale la afirmación correcta:

- a) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.
- b) El recurso contencioso-administrativo es admisible contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley.
- c) Cualquier Juzgado o Tribunal anulará una disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.
- d) El recurso contencioso-administrativo es admisible contra los actos expresos o presuntos de las administraciones públicas que deciden sobre el fondo del asunto aunque no pongan fin a la vía administrativa.

30. Los Reglamentos y disposiciones administrativas:

- a) Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas.
- b) Pueden regular cualquier materia si después son objeto de convalidación parlamentaria.
- c) Podrán contravenir los preceptos de una norma de rango superior si son de fecha posterior.
- d) No se sujetan, en su elaboración, a los principios de buena regulación.

31. Conforme al artículo 29 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local:

- a) En el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden, exclusivamente, a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores.
- b) Los municipios en régimen de Concejo Abierto ajustan su funcionamiento a las leyes de las Comunidades Autónomas en materia de régimen local y, en su defecto, a los usos, costumbres y tradiciones locales.
- c) Los alcaldes de las corporaciones de municipios de menos de 100 residentes podrán convocar a sus vecinos a Concejo Abierto para decisiones de especial trascendencia para el municipio.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

32. Señale cual es la afirmación verdadera:

- a) La aprobación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
- b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
- c) Las leyes de bases podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
- d) La delegación legislativa podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.

33. Indique la afirmación verdadera:

- a) a) La provincia es una entidad local sin personalidad jurídica propia.
- b) b) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
- c) c) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por ley ordinaria.
- d) d) Las Haciendas Locales se nutren exclusivamente de tributos propios.

34. Indique la afirmación correcta:

- a) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública nunca se pueden superar.
- b) El Estado no necesita estar autorizado por ley para contraer crédito.
- c) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
- d) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones no se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos.

35. La apertura del período de prueba en el procedimiento administrativo tendrá una duración de:

- a) No superior a diez días ni inferior a cinco.
- b) Dos meses.
- c) No superior a treinta días ni inferior a diez.
- d) No superior a cuarenta días ni inferior a veinte.

36. De acuerdo con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique la afirmación correcta en relación con los actos jurídicos de la Unión:

- a) Los dictámenes serán vinculantes en las materias de competencia exclusiva de la Unión.
- b) La directiva obligará al estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, señalando a las autoridades nacionales la forma y los medios para su consecución.
- c) El reglamento tendrá alcance general o particular, según se determine en su ámbito de aplicación.
- d) La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será obligatoria para éstos.

37. En virtud de la Ley Orgánica 14/2007, de 30 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, las competencias en materia de régimen local asumidas por la Comunidad de Castilla y León son de la siguiente naturaleza:

- a) Competencias exclusivas.
- b) Competencias de ejecución.
- c) Competencias de desarrollo normativo y ejecución.
- d) La Comunidad Autónoma no ha asumido competencias en la materia.

38. Indique la afirmación correcta:

- a) Toda notificación de una resolución o acto administrativo deberá ser cursada dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
- b) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
- c) Las notificaciones que, aun conteniendo el texto íntegro del acto o resolución, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, no surtirán efecto aunque sean conocidas por su destinatario.
- d) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel, aunque esté incurso en la obligación de relacionarse electrónicamente con la Administración.

39. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, será competente para conocer de los recursos contra las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos :

- a) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
- b) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
- c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- d) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

40. Señale en cuál de los siguientes supuestos no será necesario recabar el dictamen del Consejo de Estado, u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, para inadmitir el recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con el artículo 126 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, reguladora del Procedimiento Administrativo Común:

- a) Cuando el recurso de revisión se interponga contra actos anulables, y no nulos de pleno derecho.
- b) Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.
- c) Cuando el recurso se funde en la aparición de documentos de valor esencial para la resolución del asunto, y estos documentos no se acompañen al escrito de interposición.
- d) Cuando, previa valoración suficientemente circunstanciada, el órgano competente para resolver aprecie que el recurso se ha interpuesto de forma manifiestamente extemporánea.

41. Conforme al artículo 65 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial

- a) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
- b) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá, aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.
- c) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que los presuntamente lesionados se hayan personado en el procedimiento se dictará resolución de archivo de las actuaciones.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

42. Conforme al artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano instructor del procedimiento sancionador resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias (Señale la respuesta incorrecta):

- a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción.
- b) Cuando los hechos resulten acreditados.
- c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa.
- d) Cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.

43. En el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se regula la Sede electrónica del Sector Público: (Señale la respuesta incorrecta)

- a) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
- b) Cada Administración Pública determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deberá garantizarse la identificación del órgano titular de la sede, así como los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
- c) Las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
- d) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, cualquier tipo de certificado.

44. Conforme al artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores

- a) De 101 a 250 funcionarios: 10
- b) De 251 a 500 funcionarios: 12
- c) De 751 a 1.000 funcionarios: 25
- d) De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75

45. El artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señala respecto de la Responsabilidad penal:

- a) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá siempre los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, porque la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal siempre es necesaria para la fijación de cualquier tipo de responsabilidad.
- b) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- c) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

46. Conforme al artículo 100 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, las concesiones y autorizaciones demaniales se extinguirán por:

- a) Caducidad por vencimiento de plazo.
- b) Desaparición del bien o agotamiento del aprovechamiento.
- c) Desafectación del bien.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

47. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades establecido en el artículo 19 la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, las actividades siguientes:

- a) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que se originen como consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios.
- b) El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas.
- c) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, siempre que la actividad de las mismas esté directamente relacionada con las que gestione el Departamento, Organismo o Entidad en que preste sus servicios el personal afectado.
- d) La participación en Tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las Administraciones Públicas.

48. ¿Cuál de los siguientes límites al derecho de acceso a la información pública no está incluido en el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno?

- a) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- b) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la salud pública.
- c) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional.
- d) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la política económica y monetaria.

49. Conforme al artículo 36 de la ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley los particulares exigirán:

- a) Directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
- b) Directamente a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.
- c) De manera indiferente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones públicas las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

50. El plazo de prescripción de las faltas y sanciones conforme al Artículo 97 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es

- a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
- b) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves a los 6 meses.
- c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los 6 meses.
- d) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

Preguntas de Reserva:

- 1. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en la Constitución en el**
 - a) Artículo 17.3
 - b) Artículo 16.4
 - c) Artículo 18.4
 - d) Artículo 20.4

- 2. El Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica en su artículo 4 recoge entre los siguientes Principios básicos del Esquema Nacional de Seguridad.**
 - a) Gestión de riesgos.
 - b) Líneas de actuación.
 - c) Seguridad de la Defensa.
 - d) Ninguna de las anteriores es correcta.

- 3. ¿Dónde se regula el funcionamiento electrónico del Sector Público en la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público?**
 - a) No se regula en esta Ley.
 - b) Título preliminar. Capítulo V
 - c) Título I. Capítulo VI
 - d) Título preliminar. Capítulo IV

- 4. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes, de conformidad con el 37 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público**
 - a) Los planes de Previsión Social Complementaria.
 - b) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna.
 - c) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
 - d) Todas las respuestas son correctas.

5. Conforme al artículo 27 de la ley 40/2015, de 1 de octubre del Sector Público donde se recoge el principio de tipicidad

- a) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
- b) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
- c) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
- d) Ninguna es correcta.